



Asamblea General

Distr. general
25 de septiembre de 2012
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

20º período de sesiones

Temas 2 y 4 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
del Alto Comisionado y del Secretario General**

Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria: aplicación de la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos

Informe del Secretario General*

Resumen

El presente informe refleja la situación de la aplicación de la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos de 23 de marzo de 2012 desde la presentación del primer informe del Secretario General sobre el tema (A/HRC/20/37), relativo al período comprendido hasta el 11 de mayo de 2012. El presente informe contiene información sobre los acontecimientos pertinentes ocurridos hasta el 20 de julio de 2012 y un resumen de la información presentada por el Gobierno de la República Árabe Siria en notas verbales dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante el período que se examina, así como información sobre las medidas y disposiciones adoptadas por interesados pertinentes a nivel internacional.

El cese del fuego que entró en vigor el 12 de abril de 2012 se mantuvo durante varios días. Desde el 16 de abril hasta principios de mayo de 2012 no se respetó plenamente el cese de la violencia armada, si bien se observó una reducción general de la violencia, en particular con respecto al uso de armas pesadas. Al parecer, la presencia de observadores de la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria (UNSMIS) en algunas zonas tuvo un efecto tranquilizador. Desde el 10 de mayo la situación se ha ido deteriorando, con una mayor utilización de artefactos explosivos improvisados. Al mismo tiempo, hay informes de enfrentamientos esporádicos entre las partes y de utilización de armas pesadas por parte de las fuerzas del Gobierno. A fines de mayo la situación se deterioró aun más a la luz del mayor número de ataques con armas pesadas e infantería

* Documento presentado con retraso.

mecanizada contra centros de población por las fuerzas gubernamentales como parte de una campaña destinada a eliminar a los grupos armados de oposición. Paralelamente a estos ataques se registró un mayor número de ataques de los grupos armados opositores contra las fuerzas de seguridad del Gobierno, así como contra infraestructura gubernamental y civil, con utilización de armas pequeñas, artefactos explosivos improvisados y granadas propulsadas por cohetes. Los enfrentamientos constantes entre las partes, el uso de armas pesadas por el Gobierno y la utilización cada vez más frecuente de artefactos explosivos improvisados han causado un gran número de bajas civiles y un desplazamiento masivo de civiles dentro y fuera del país.

Durante el período que se examina se recibieron numerosos informes de que las fuerzas del Gobierno habían cometido muchas violaciones de derechos humanos, las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, crímenes de guerra. Se informó asimismo de violaciones graves de derechos humanos cada vez más frecuentes por parte de los grupos armados opuestos al Gobierno.

Cabe señalar que, durante todo el período que se examina, el plan de seis puntos propuesto por el Enviado Especial Conjunto siguió siendo un elemento decisivo de los esfuerzos encaminados a lograr una solución pacífica del conflicto en la República Árabe Siria.

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–2	4
II. Acontecimientos recientes.....	3–9	4
A. Contexto actual	3–4	4
B. Esfuerzos realizados por el Enviado Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes para Siria.....	5–6	4
C. Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria	7–9	5
III. Información proporcionada por el Gobierno de la República Árabe Siria y su posición con respecto a la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos	10–16	6
IV. Aplicación de la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos	17–82	7
A. Fin a la violencia y las violaciones de derechos humanos	18–28	7
B. Asistencia humanitaria.....	29–34	9
C. Refugiados fuera de la República Árabe Siria	35–38	10
D. Medidas adoptadas por el Gobierno para satisfacer las demandas y aspiraciones del pueblo sirio.....	39–44	11
E. Medios de comunicación y periodistas	45–49	12
F. Ciudadanos extranjeros.....	50–54	13
G. Ciudades asediadas	55–57	14
H. Plan de Acción de la Liga de los Estados Árabes	58–61	15
I. Detenidos	62–67	15
J. Derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica.....	68–70	16
K. Comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en la República Árabe Siria	71–74	17
L. Oficina del Alto Comisionado y titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos	75–78	18
M. Esfuerzos desplegados por el Secretario General	79–81	18

I. Introducción

1. En su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos condenó en los términos más enérgicos las violaciones generalizadas, sistemáticas y flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales cometidas, en dramático aumento, por las autoridades sirias, e instó a las autoridades sirias a que pusieran fin de inmediato a todo tipo de violencia y a todas las violaciones de los derechos humanos.

2. En la resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos me solicitó que le presentara un informe sobre la aplicación de esa resolución en sus períodos de sesiones 20º y 21º. El 27 de junio de 2012 se presentó al Consejo mi primer informe sobre la aplicación de la resolución 19/22, relativo al período comprendido hasta el 11 de mayo de 2012 (A/HRC/20/37). Conforme a la solicitud del Consejo, en el presente informe se centra la atención en la situación de la aplicación de la resolución 19/22 y se esbozan los acontecimientos pertinentes ocurridos sobre el terreno hasta el 20 de julio de 2012. Se incluye un resumen de la información presentada por el Gobierno de la República Árabe Siria en notas verbales dirigidas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) durante el período que se examina. Además, el informe contiene información sobre las medidas adoptadas por los agentes internacionales interesados, incluidos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Enviado Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes para Siria y otras entidades de las Naciones Unidas.

II. Acontecimientos recientes

A. Contexto actual

3. Cabe recordar que el 8 de mayo de 2012, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) declaró públicamente que había llegado a la conclusión de que en la República Árabe Siria existía un conflicto armado de carácter no internacional entre las fuerzas del Gobierno y grupos armados de la oposición presentes y activos, en particular en las provincias de Homs e Idlib. El 16 de julio de 2012, el CICR afirmó además que los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos de oposición en varias zonas del país, incluidas, pero no exclusivamente, Homs, Idlib y Hama, habían llegado al umbral de un conflicto armado de carácter no internacional.

4. El 2 de julio de 2012, la Alta Comisionada informó al Consejo de Seguridad de la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria. En el curso de su informe, la Alta Comisionada recordó la obligación de ambas partes de ceñirse a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Comunicó graves violaciones de los derechos humanos cometidas por ambas partes, las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad y, posiblemente, crímenes de guerra, e instó a que se exigiera que los autores rindieran cuentas de sus actos.

B. Esfuerzos realizados por el Enviado Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes para Siria

5. Durante el período que se examina, el plan de seis puntos propuesto por el Enviado Especial Conjunto siguió siendo un elemento decisivo de los esfuerzos encaminados a resolver pacíficamente el conflicto en la República Árabe Siria. En el informe relativo a la aplicación de la resolución 2043 (2012) del Consejo de Seguridad que presenté al Consejo

(S/2012/523), así como en mis cartas de 25 y 27 de mayo de 2012 dirigidas al Consejo (S/2011/363 y S/2012/368) figura una descripción detallada de la aplicación del plan de seis puntos.

6. El 7 de junio, el Enviado Especial Conjunto informó al Consejo de Seguridad de que el plan de seis puntos no se había aplicado y no había habido un cese de la violencia, pese a los esfuerzos realizados por la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria (UNSMIS) para apoyar a las partes a fin de atenuar la crisis. El Enviado Especial Conjunto comunicó que las violaciones de derechos humanos continuaban y la violencia por parte de las fuerzas del Gobierno se había intensificado y que, por su parte, los grupos armados de oposición habían declarado que no respetarían la exigencia de cese de las hostilidades y que redoblarían sus ataques. El 30 de junio, en Ginebra, el Enviado Especial Conjunto convocó una reunión del Grupo de Acción para Siria, integrado por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Secretario General de la Liga de los Estados Árabes, la Unión Europea, los cinco Miembros permanentes del Consejo de Seguridad y otros países con influencia en las partes en el conflicto. En su comunicado de 30 de junio de 2012, el Grupo de Acción renovó el compromiso con el plan de seis puntos propuesto por el Enviado Especial Conjunto y estableció principios y directrices para una transición política de liderazgo sirio.

C. Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en la República Árabe Siria

7. Cabe recordar que, tras el enuncio del cese de la violencia armada, facilitado por las Naciones Unidas, que entró en vigor en todo el país el 12 de abril de 2012, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2043 (2012), autorizó el establecimiento de la UNSMIS. La Misión se estableció por un período inicial de 90 días para vigilar un cese de la violencia armada en todas sus formas por todas las partes y vigilar y apoyar la plena aplicación de la propuesta de seis puntos aprobada por el Consejo de Seguridad en su resolución 2042 (2012). Para el 30 de mayo de 2012, la UNSMIS estaba plenamente operacional y se esforzaba activamente por apoyar todos los aspectos del plan de seis puntos, a la vez que vigilaba el cese de la violencia.

8. A fines de mayo de 2012, la violencia aumentó marcadamente en todo el país. La escalada de violencia afectó directa e indirectamente a los observadores de las UNSMIS y en última instancia impidió la aplicación de las actividades que se les habían encomendado. El 15 de junio, la UNSMIS suspendió temporalmente sus operaciones debido al recrudecimiento de las hostilidades, así como a los obstáculos para vigilar la situación sobre el terreno y a la amenaza directa que pesaba contra su personal y sus activos. El 26 de junio de 2012, la UNSMIS reanudó en parte sus actividades, con sujeción a las condiciones de seguridad. La Misión realizó visitas a hospitales y escuelas a fin de vigilar, observar y comunicar el impacto de la violencia en la población civil y evaluar el grado de protección médica y el acceso a la ayuda humanitaria.

9. El 20 de julio de 2012, cuando expiró el mandato inicial de 90 días de la UNSMIS, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 2059 (2012), en la que prorrogó el mandato de la UNSMIS por un último período de 30 días. El Consejo señaló que prorrogaría el mandato de la UNSMIS posteriormente solo en caso de que se confirmara que habían dejado de utilizarse armas pesadas y que todas las partes habían reducido suficientemente el nivel de violencia para que la UNSMIS pudiese ejecutar su mandato.

III. Información proporcionada por el Gobierno de la República Árabe Siria y su posición con respecto a la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos

10. El 1 de junio de 2012, el ACNUDH envió, en mi nombre, una nota verbal dirigida a la Misión Permanente de la República Árabe Siria en la que solicitó información sobre las medidas adoptadas o previstas por el Gobierno para aplicar la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos. A solicitud de la Misión Permanente, el plazo de presentación de esa información se prorrogó un mes, es decir, hasta el 11 de julio de 2012. El 16 de julio de 2012, la Misión Permanente envió una nota verbal dirigida al ACNUDH en la que le proporcionó información relativa a la resolución 19/22.

11. Durante el período que se examina, el ACNUDH recibió otras 56 notas verbales de la Misión Permanente de la República Árabe Siria. Algunas estaban dirigidas a los titulares de procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos, a órganos creados en virtud de tratados y a la comisión internacional independiente encargada de investigar la situación relativa a la República Árabe Siria. Algunas de las notas verbales incluían estadísticas sobre el número de bajas civiles, mientras que otras guardaban relación con acusaciones de secuestros, sabotaje y saqueo de bienes y ataques contra la propiedad pública y privada, que el Gobierno atribuía a "grupos armados terroristas", así como información sobre el número de explosivos que habían sido desactivados por las fuerzas del Gobierno o que habían explotado. Varias notas verbales incluían información sobre investigaciones oficiales de casos de las matanzas en masa en Al-Houla y Al Qubeir perpetradas en mayo y junio de 2012. En el presente informe figura un resumen de las notas verbales dirigidas específicamente al ACNUDH que contienen información pertinente con respecto a la aplicación de la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos.

12. En su nota verbal de fecha 16 de julio de 2012, el Gobierno reiteró que seguía rechazando la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos por el hecho de que era política y se excedía del mandato del Consejo de proteger y promover los derechos humanos. El Gobierno reiteró su compromiso con todos los mecanismos de derechos humanos que no estaban "politizados". Afirmó que la resolución 19/22 no reconocía los considerables esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir sus compromisos y sus obligaciones internacionales para con su población y la reforma política y de gobernanza. En esa misma nota verbal, el Gobierno proporcionó información sobre las violaciones de derechos humanos cometidas, a su juicio, por los que denominó "grupos armados terroristas". No facilitó información sobre las presuntas violaciones cometidas por las fuerzas gubernamentales o las milicias partidarias del Gobierno.

13. El Gobierno reiteró que los grupos armados seguían perpetrando actos criminales y terroristas contra ciudadanos sirios, a la vez que saqueaban bienes públicos y privados. Según el Gobierno, esos grupos recibían grandes cantidades de armas de algunos Estados Miembros y fabricaban las demás. El Gobierno informó de que había descubierto un gran número de explosivos y cohetes en varios almacenes y fincas. Afirmó asimismo que esa clase de explosivos se colocaban en lugares muy concurridos o estaban dirigidos contra las fuerzas del Gobierno o contra ciudadanos que se negaban a sumarse o apoyar a los "grupos armados terroristas".

14. El Gobierno afirmó que, mientras que la resolución 19/22 del Consejo atribuía a las autoridades sirias violaciones contra niños, pasaba por alto las violaciones cometidas por los "grupos armados terroristas", como matanzas, secuestros y utilización de niños como escudos humanos. Según el Gobierno, esos grupos explotaban a los niños con fines políticos y mediáticos, entre otras cosas, filmándolos en situaciones emotivas previamente escenificadas en las que atribuían esas violaciones a las fuerzas del Gobierno. El Gobierno

comunicó que los "grupos armados terroristas" habían impedido a los niños asistir a la escuela y habían atacado e incendiado escuelas, además de utilizarlas como sede de sus actos terroristas y como lugares de detención, torturas y ejecuciones. En ese contexto, el Gobierno reiteró que era consciente de sus responsabilidades y obligaciones respecto de su población, especialmente los niños, y que había tratado de aumentar la sensibilización de los padres sobre cuestiones relativas a la protección de los niños y los riesgos que éstos podrían enfrentar como consecuencia de los actos de "grupos armados terroristas".

15. En opinión del Gobierno, el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 19/22, no condenara los actos de los "grupos armados terroristas" daba pie para que esos grupos continuaran con sus prácticas brutales y sus violaciones de los derechos humanos. Según el Gobierno, el Consejo no abordaba la cuestión de la financiación, el equipamiento, el entrenamiento y la protección de esos "grupos armados terroristas" por Estados Miembros.

16. El Gobierno reiteró su posición de que en la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos hacía caso omiso de las sanciones y su efecto adverso en la población siria, así como de la alarmante situación humanitaria que ya existía en el país. A juicio del Gobierno, la República Árabe Siria había sido "sometida a más de 60 conjuntos de sanciones coercitivas unilaterales e ilegales por los Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga de los Estados Árabes, Turquía, Suiza, el Canadá, Australia, el Japón y otros". El Gobierno señaló que las sanciones estaban dirigidas contra todos los aspectos de la vida, incluidos la economía, las finanzas, la agricultura, la industria, la alimentación, la medicina, el turismo, el transporte, la ciencia y la cultura. El Gobierno describió las sanciones como equivalentes a un castigo colectivo destinado a obtener ganancias políticas ejerciendo presión en el pueblo sirio, que padecía directamente los efectos de esas medidas unilaterales.

IV. Aplicación de la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos

17. En su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos solicitó la adopción de medidas por parte de la República Árabe Siria, en particular en los párrafos 3, 4, 9, 11, 12, 13, 17 y 18. El Gobierno, en su nota verbal de fecha 16 de julio de 2012, afirmó que la responsabilidad de aplicar la mayoría de las peticiones de cesar la violencia y las violaciones de derechos humanos formuladas en la resolución 19/22 recaía en los "grupos armados terroristas" y en los Estados Miembros que financiaban, apoyaban y protegían a esos grupos. El Gobierno instaba a la comunidad internacional a que pusiera fin a esa intervención extranjera y ejerciera presión sobre esos Estados Miembros para que cesaran sus violaciones de los derechos humanos cometidas en su nombre por "grupos armados terroristas".

A. Fin a la violencia y las violaciones de derechos humanos

1. Violencia

18. El Consejo de Derechos Humanos, en los párrafos 3, 4 y 13 a) de la resolución 19/22, instó encarecidamente a las autoridades sirias a que pusieran fin de inmediato a todo tipo de violencia y a todas las violaciones de los derechos humanos y exigió que las autoridades sirias cumplieran con su obligación de proteger a la población. En el párrafo 13 c), el Consejo exigió que el Gobierno retirara todas las fuerzas militares y armadas sirias de las ciudades y demás poblaciones, y las llevara de regreso a sus cuarteles de origen, de

conformidad con el Plan de Acción de la Liga de los Estados Árabes de 2 de noviembre y sus decisiones de 22 de enero y 12 de febrero de 2012.

19. Con arreglo al plan de seis puntos, el Gobierno se comprometió a poner fin de inmediato a todas las formas de violencia cometidas por todas las partes y a proteger a la población civil. Cabe recordar que, en una comunicación dirigida al Enviado Especial Conjunto el 1 de abril de 2012, el Gobierno se comprometió a detener inmediatamente los movimientos de tropas, dejar de utilizar armas pesadas en los centros de población y a iniciar la retirada de las concentraciones militares en dichos centros y en sus alrededores a más tardar el 10 de abril de 2012. El Enviado Especial Conjunto intentó obtener un compromiso similar por parte de los grupos armados.

20. El cese del fuego que entró en vigor el 12 de abril se mantuvo durante varios días. Del 16 de abril hasta principios de mayo de 2012, el cese de la violencia armada no se respetó plenamente; sin embargo, se informó de una reducción general de la violencia, incluida la utilización de armas pesadas. Al parecer, la presencia de observadores de la UNSMIS en algunas zonas tuvo un efecto tranquilizador.

21. A principios de mayo de 2012, el aumento del número y tamaño de los artefactos explosivos improvisados marcó un importante deterioro de la situación sobre el terreno. El 10 de mayo, en Damasco, dos ataques suicidas con bomba contra instalaciones del Gobierno causaron la muerte o lesiones a miembros de las fuerzas gubernamentales, así como a civiles. El día siguiente, se informa que en Aleppo explotó una bomba en una zona de mercado y las fuerzas del Gobierno incautaron un camión que transportaba artefactos explosivos pesados antes de que pudiera producirse su detonación. Paralelamente se recibieron informes de enfrentamientos intermitentes entre las partes en el conflicto y de un aumento del número de armas pesadas utilizadas por las fuerzas del Gobierno en centros de población o sus alrededores. Los grupos armados opuestos al Gobierno también atacaron a efectivos, instalaciones y puestos de control de las fuerzas oficiales.

22. A fines de mayo de 2012 se observó un deterioro de la situación a la luz de un mayor número de ataques contra centros de población por parte de las fuerzas del Gobierno con uso de armas pesadas, en particular tanques y bombardeo de artillería, helicópteros equipados con cohetes, cañones e infantería mecanizada, como parte de una campaña destinada a eliminar a los grupos armados de oposición. Las armas pesadas se utilizaron especialmente en Dar'a, Homs, Hama, Idlib y Rif Dimashq y se hicieron extensivos a las zonas urbanas más grandes de Deir el-Zour, Damasco y Aleppo. A estos ataques se sumó un creciente número de ataques planificados y coordinados contra las fuerzas gubernamentales, así como contra infraestructura gubernamental y civil, por grupos armados de oposición al Gobierno que utilizaban armas pequeñas, artefactos explosivos improvisados y granadas propulsadas por cohetes.

23. Se denunció el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del Gobierno en el curso de enfrentamientos armados en zonas densamente pobladas. Ese uso de la fuerza dio lugar a considerables bajas civiles y al desplazamiento en masa de civiles dentro y fuera del país. Si bien las Naciones Unidas no están en condiciones de verificar el número de bajas, el Gobierno comunicó que más de 7.000 ciudadanos habían sido asesinados. Según algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) sirias y grupos de oposición, la cifra de ciudadanos que habían perdido la vida como consecuencia de la crisis oscilaba entre 13.000 y 17.000.

24. El Gobierno no proporcionó información sobre el retiro de las armas pesadas de los centros de población durante el período que se examina; sólo afirmó que, cuando retiró las armas pesadas de esas zonas durante la visita de la misión de observación de la Liga de los Estados Árabes, realizada en diciembre de 2011, los "grupos armados terroristas" habían

reforzado su posición rápidamente y continuaban aterrorizando e intimidando a la población civil.

25. En su nota verbal de fecha 16 de julio de 2012, el Gobierno de la República Árabe Siria informó de que había emitido órdenes estrictas a las fuerzas de seguridad de no utilizar las armas en las zonas en que operasen, salvo en casos de defensa personal, enfrentamientos armados con "grupos armados terroristas" o para prevenir la comisión de actos atroces contra ciudadanos o la matanza masiva de civiles. En opinión del Gobierno, las fuerzas de seguridad desempeñaban sus funciones con el mayor profesionalismo, precisión y autocontrol respecto de los civiles a la vez que protegían el derecho de éstos a la vida libre de los crímenes cometidos por los "grupos armados terroristas".

2. Violaciones de derechos humanos

26. Según informes recibidos por el ACNUDH, las fuerzas del Gobierno siguieron cometiendo numerosas violaciones de derechos humanos durante el período que se examina, en particular detenciones y arrestos arbitrarios, tortura y otros tratos crueles durante la privación de libertad, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos ilegales. Se informó asimismo de violaciones de derechos contra mujeres y niños. Además se denunciaban cada vez más casos de secuestro, tortura y malos tratos y asesinatos de miembros de las fuerzas del Gobierno capturados, así como de las milicias y civiles partidarios del Gobierno, por los grupos de oposición. Se recibieron asimismo informes de que esos grupos realizaban ejecuciones sumarias de detenidos después de someterlos a "juicios rápidos". Según otras informaciones recibidas por el ACNUDH, los grupos armados opuestos al Gobierno violaban los derechos de los niños, entre otras cosas utilizándolos como soldados. A la luz de otros informes, tanto las fuerzas del Gobierno como los grupos armados opositores habían desplegado francotiradores que disparaban contra los civiles.

27. En su nota verbal de 16 de julio de 2012, el Gobierno de la República Árabe Siria afirmó que había adoptado medidas para promover y proteger los derechos humanos de todos los sirios, sin discriminación sobre la base de la raza, el origen étnico, el color de la piel, el sexo, la religión o la filiación.

28. El Gobierno comunicó asimismo que, desde el comienzo de la crisis, había llevado a cabo investigaciones transparentes, imparciales e independientes sobre las violaciones de derechos humanos a fin de castigar a los responsables y ofrecer resarcimiento a las víctimas. El Gobierno se refirió al establecimiento de una comisión jurídica independiente de ámbito nacional encargada de investigar todos los delitos relacionados con la crisis e informó de que había examinado más de 6.400 denuncias y remitido un gran número de esos casos a las autoridades competentes. El Gobierno se refirió además a una comisión especial de investigación creada con el fin de investigar los acontecimientos ocurridos en Al Houla el 12 de mayo de 2012. El Gobierno afirmó que ambas comisiones gozaban de amplias facultades de conformidad con las normas internacionales más exigentes, incluida la autoridad para solicitar acceso a toda información que estimaran necesaria. A juicio del Gobierno, las comisiones habían demostrado su capacidad de hacer justicia a nivel nacional. En este contexto, el Gobierno afirmó que las autoridades pertinentes habían impuesto sanciones disciplinarias a varios miembros de las fuerzas gubernamentales y que otros estaban siendo investigados o serían juzgados por los tribunales competentes.

B. Asistencia humanitaria

29. En el párrafo 9 de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos instó a las autoridades sirias a que aseguraran oportunamente el acceso sin trabas y en condiciones de seguridad de todos los actores humanitarios, y garantizaran el tránsito seguro por el país de material médico y de asistencia humanitaria. La situación humanitaria continuó

deteriorándose como consecuencia de los enfrentamientos cada vez más intensos. La violencia y lucha sin tregua socavan los esfuerzos para atender a las necesidades humanitarias. Según estimaciones de los agentes humanitarios, al 13 de julio de 2012 había un millón y medio de personas afectadas por el conflicto en la República Árabe Siria.

30. Durante el período que se examina aumentó el número de ataques contra hospitales, instalaciones médicas y ambulancias, así como de amenazas directas contra el personal médico y el asesinato de miembros de dicho personal. Por otra parte, la ocupación y utilización de hospitales como bases militares o la presencia de fuerzas del Gobierno dentro o cerca de los hospitales han obstaculizado el acceso a la salud, especialmente para los sospechosos de estar afiliados con la oposición o los grupos armados opositores. Además, se recibieron informes sobre la destrucción, el incendio o el saqueo de instalaciones médicas por grupos armados de oposición al Gobierno, así como sobre la utilización de hospitales como bases militares también por dichos grupos.

31. Desde la presentación de mi informe anterior sobre la aplicación de la resolución 19/22, el Gobierno ha dado su avenencia al Plan de respuesta a la asistencia humanitaria a Siria y las Naciones Unidas han aumentado su asistencia humanitaria. En julio de 2012 se brindó asistencia alimentaria a aproximadamente unas 800.000 personas. También aumentó la ayuda en forma de artículos no alimentarios, asistencia sanitaria de urgencia, cursos de recuperación y otras actividades. Pese a la precaria situación de seguridad durante el período que se examina, tras el acuerdo celebrado con el Gobierno, las Naciones Unidas han comenzado a ampliar su presencia en el país. Al 13 de julio de 2012, ocho ONG habían puesto en marcha actividades en apoyo de la población afectada y un creciente número de ONG nacionales y de base comunitaria participaba en la respuesta humanitaria. No obstante, esos esfuerzos siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades cada vez mayores.

32. En este contexto, el Gobierno de la República Árabe Siria recordó que, en marzo de 2012, dirigió un proceso conjunto para evaluar las necesidades humanitarias de la población afectada por la crisis. Recalcó que había cumplido su compromiso de permitir la distribución de ayuda humanitaria de conformidad con el memorando de entendimiento pertinente de las Naciones Unidas. Sin embargo, a partir de mediados de julio, sólo una pequeña parte del Plan de respuesta humanitaria había recibido financiación, lo que afectó adversamente la respuesta humanitaria. El Gobierno informó de que también estaba prestando asistencia humanitaria, incluida ayuda médica, alimentos y otros servicios, a las personas necesitadas y había puesto en marcha proyectos de reconstrucción de edificios a fin de facilitar el regreso de las personas desplazadas a sus hogares.

33. En sus notas verbales de 19 de junio y 16 de julio de 2012, el Gobierno afirmó que los "grupos armados terroristas" habían impedido que la ayuda humanitaria llegase a las personas necesitadas y estaban perpetrando ataques contra los trabajadores humanitarios. El Gobierno atribuyó a esos grupos armados un ataque, ocurrido el 13 de junio de 2012, contra un convoy del CICR y de la Media Luna Roja de la República Árabe Siria, el cual fue blanco de un artefacto explosivo que causó lesiones a tres trabajadores. El Gobierno añadió que en junio de 2012 había intentado varias veces otorgar acceso al CICR a zonas de Homs controladas por "grupos armados terroristas" a fin de evacuar a los enfermos y heridos, las personas de edad, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales y facilitar la distribución de la ayuda humanitaria. Según el Gobierno, los "grupos armados terroristas" rehusaron evacuar a los enfermos y heridos o permitir la asistencia humanitaria y atacaron a trabajadores humanitarios en la zona durante tres semanas, hasta que el Comité Sirio de Reconciliación Nacional, en coordinación con los interesados pertinentes, logró evacuar a 92 civiles. El Gobierno afirmó que los restantes habían sido utilizados como escudos humanos por los "grupos armados terroristas", haciendo caso omiso de sus

obligaciones en virtud de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

34. En junio de 2012, los agentes humanitarios informaron de que la aplicación de un cese del fuego humanitario negociado en Homs y Deir el-Zour con las partes en el conflicto a fin de permitir la evacuación de civiles y cadáveres y la entrega de la ayuda humanitaria y médica no se había logrado, dado que ninguna de las partes había suspendido las hostilidades como estaba previsto.

C. Refugiados fuera de la República Árabe Siria

35. En el párrafo 10 de la resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos invitó a todos los organismos de las Naciones Unidas, en particular a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a que prestaran apoyo a los refugiados sirios y a los países que les daban acogida.

36. Como consecuencia del conflicto, la corriente de refugiados a países vecinos de la República Árabe Siria continuó sin tregua durante el período que se examina. Desde la presentación de mi informe anterior al Consejo de Derechos Humanos se duplicó el número de refugiados. Según la Respuesta regional a los refugiados de Siria, compilada por el ACNUR¹ al 19 de julio de 2012, un total de 119.618 refugiados sirios, de los cuales el 75% eran mujeres y niños, recibían asistencia en países vecinos (42.682 en Turquía, 36.450 en Jordania, 32.486 en el Líbano y 8.000 en el Iraq). El ACNUR informó asimismo de que, debido a la creciente preocupación por la situación, más de 13.000 refugiados iraquíes abandonaron la República Árabe Siria durante el primer semestre de 2012, la mayoría de los cuales regresó al Iraq².

37. Con creciente frecuencia, los sirios que deseaban escapar del conflicto buscaban refugio fuera de la región. En Europa, el número de solicitantes de asilo aumentó notablemente. Según el ACNUR, al 20 de julio de 2012, se habían presentado a países europeos unas 12.000 solicitudes de asilo de ciudadanos sirios³.

38. El 28 de junio de 2012 se puso en marcha un plan de respuesta revisado para los refugiados a fin de ayudar a los refugiados sirios en países vecinos. Al 19 de julio, sólo el 26% de las necesidades totales contaba con financiación, lo que significaba una enorme presión para los países anfitriones. Además, hasta esa fecha se estimaba que había un millón de desplazados internos en la República Árabe Siria.

D. Medidas adoptadas por el Gobierno para satisfacer las demandas y aspiraciones del pueblo sirio

39. En el párrafo 11 a) de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exigió que las autoridades sirias respetaran las aspiraciones y las demandas del pueblo sirio. Cabe recordar que el plan de seis puntos y el comunicado del Grupo de Acción tenían por objeto facilitar un proceso político inclusivo dirigido por Siria a fin de tener en cuenta las aspiraciones y preocupaciones legítimas del pueblo sirio. El 7 de junio de 2012, en un informe a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, el Enviado Especial Conjunto

¹ Véase <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>.

² Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Humanitarian Bulletin, Siria, N° 3, 5 de julio de 2012.

³ *Ibid.*, N° 5, 20 de julio a 3 de agosto de 2012.

afirmó que el plan no se había aplicado y, por consiguiente, no era posible entablar un diálogo político significativo.

40. Durante el período que se examina, el Gobierno de la República Árabe Siria anunció la adopción de nuevas iniciativas en el marco de las reformas políticas y de gobernanza que tenía previstas en aras del pluralismo político y de un proceso político democrático. Tras el referendo celebrado el 26 de febrero de 2012, el 7 de mayo se celebraron elecciones parlamentarias y el 23 de junio fue nombrado un nuevo Gobierno.

41. El Gobierno hizo referencia a un diálogo nacional amplio iniciado a mediados de 2011 con el objetivo expreso de lograr una solución nacional pacífica. Según el Gobierno, algunas partes continuaron rechazando el diálogo. Pese a ello, había proseguido sus esfuerzos de reforma, lo que quedaba demostrado por el hecho de que el Gobierno de unidad recientemente nombrado incluía a toda una gama de miembros de la oposición nacional que rechazaban el uso de armas de fuego y la intervención extranjera. Además, el Gobierno señaló que un dirigente de la oposición ocupaba el cargo de Primer Ministro Adjunto y otro había sido nombrado Ministro al frente del nuevo Ministerio de Reconciliación Nacional cuyo objetivo era velar por el seguimiento de todos los problemas causados por la crisis reciente y hallar soluciones apropiadas en las diversas esferas.

42. El Gobierno comunicó que estaba realizando reformas políticas, económicas y sociales democráticas y amplias, dando prioridad a la cuestión de los derechos humanos. Afirmó que esas reformas tenían por objeto atender a las demandas de la población por medio de elecciones y diálogo. Añadió que, en el marco de esas reformas, había revisado la mayoría de las leyes para ajustarlas a las normas internacionales, por ejemplo la Ley de elecciones N° 101 (2011) y la Ley de partidos políticos N° 100 (2011), y abolido la Ley de emergencia y el Tribunal de Seguridad del Estado. El Gobierno hizo hincapié en que había aprobado nueva legislación, como una ley destinada a reglamentar las manifestaciones pacíficas, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes en cada esfera.

43. El Gobierno hizo referencia asimismo a las enmiendas hechas a la Constitución, la cual fue aprobada por referendo en febrero de 2012. Según el Gobierno, entre esas enmiendas figuraban cambios como la abolición del artículo VIII de la Constitución, relativo a la función que del partido Baath en la dirección del Estado y la sociedad, así como de otros párrafos, teniendo en cuenta las reformas efectuadas en materia de derechos humanos y las obligaciones y compromisos internacionales contraídos por el Estado.

44. El Gobierno comunicó que había establecido un nuevo sistema electoral en consonancia con las normas internacionales, el cual garantizaba la transparencia, integridad e igualdad de representación a todos los sectores de la sociedad. Afirmó que el nuevo sistema electoral garantizaba los derechos de libertad de expresión, opinión y reunión pacífica, así como el derecho de afiliación a partidos políticos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Según el Gobierno, 18 partidos políticos participaron en las elecciones, lo que representaba una duplicación del número de partidos políticos autorizados. El Gobierno señaló que 5.186.957 ciudadanos (el 51,26% del electorado) habían votado libremente en 15 distritos electorales pese a las circunstancias excepcionales imperantes en el país y los intentos de desestabilizar el proceso electoral por parte de "grupos armados terroristas".

E. Medios de comunicación y periodistas

45. En el párrafo 11 b) de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exigió que las autoridades sirias pusieran fin de inmediato a todos los ataques contra periodistas y les ofrecieran protección adecuada, respetaran plenamente la libertad de expresión y

permitieran que los medios de comunicación independientes e internacionales llevaran a cabo su labor.

46. El Gobierno se comprometió a garantizar a los periodistas la libertad de circulación en todo el país y aplicarles una política de visados no discriminatoria, de conformidad con el plan de seis puntos. A partir del 25 de marzo de 2012, el Gobierno agilizó la emisión de visados de entrada a los periodistas. Durante el período que se examina, el ACNUR recibió periódicamente notas verbales del Gobierno sobre el número de periodistas internacionales y árabes y medios de información a los que se había otorgado visados de entrada. En la comunicación más reciente al respecto, recibida el 16 de julio de 2012 y relativa al período comprendido entre el 25 de marzo al 12 de julio de 2012, el Gobierno afirmó que más de 237 medios de información internacionales habían entrado en la República Árabe Siria. A este respecto, hizo referencia asimismo a su carta de fecha 31 de mayo de 2012 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad y a mí por el Representante Permanente de la República Árabe Siria (S/2012/389), en la que citó los nombres de 28 periodistas extranjeros que, según informes recibidos, habían entrado ilegalmente en el país.

47. Como se señala en mi informe al Consejo de Seguridad sobre la aplicación de la resolución 2043 (2012) del Consejo (S/2012/523), varios medios de difusión internacionales aseguraron que no se habían expedido visados a sus periodistas durante meses. Algunos periodistas sirios afirmaron haber sido detenidos por las fuerzas del Gobierno o agredidos físicamente u hostigados por grupos de detractores del Gobierno. También se recibieron informes de que periodistas adscritos a medios de comunicación oficiales sirios no se arriesgaban a entrar en zonas controladas por los grupos armados de la oposición porque temían por su seguridad.

48. El 28 de junio de 2012, el Gobierno informó al ACNUDH de que el 27 de junio "grupos armados terroristas" habían atacado la sede del canal de noticias sirio Al-Ikhbariya, cerca de Damasco, y habían destruido el local y asesinado a tres periodistas, cuatro miembros del equipo y los guardias de seguridad del edificio. El 2 de julio, el Frente Al-Nusra reivindicó la autoría de ese ataque en su página web.

49. A juicio del Gobierno, el Consejo de Derechos Humanos había hecho caso omiso de la cuestión de las sanciones impuestas a los medios de información gubernamentales y no gubernamentales sirios, a la prensa y a autores de blogs por algunos Estados Miembros. El Gobierno se refería, entre otras cosas, a la resolución de la Liga de los Estados Árabes de 2 de junio de 2012, en la que la Liga solicitaba a los administradores de la organización árabe de comunicaciones por satélite (Arabsat) que adoptara las medidas necesarias para dejar de emitir los canales sirios gubernamentales y no gubernamentales por satélite. A juicio del Gobierno, esa resolución tenía por objeto censurar a los medios de difusión y excluir del discurso mediático cualquier opinión alternativa. En este contexto, el Gobierno hizo referencia asimismo a una nota verbal de fecha 19 de junio de 2012 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad y a mí (A/66/853-S/2012/461). El Gobierno consideraba que esas medidas eran unilaterales y estaban destinadas a silenciar a los medios nacionales sirios, en flagrante contradicción con el principio de libertad de los medios y de la información y con la disposición del plan de seis puntos relativa a la libertad de circulación de los periodistas. Según el Gobierno, esas medidas equivalen a dar luz verde a los "grupos armados terroristas" para atacar a los periodistas y medios de comunicación sirios.

F. Ciudadanos extranjeros

50. En el párrafo 11 c) de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exigió que las autoridades sirias adoptaran medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los ciudadanos extranjeros en la República Árabe Siria, incluidos los refugiados y el personal diplomático, así como la protección de sus bienes.

51. La situación imperante en la República Árabe Siria ha afectado de forma gradual y notable la situación de los refugiados que viven en el país, incluidos 500.000 refugiados palestinos y más de 103.000 refugiados iraquíes registrados⁴. En junio de 2012, el ACNUR señaló que los refugiados en la República Árabe Siria no habían sido atacados durante los enfrentamientos armados, pese a que se recibía un número creciente de informes sobre problemas de seguridad que les afectaban. El conflicto repercutía negativamente en la capacidad de ofrecer protección y asistencia a esos refugiados⁵.

52. En su nota verbal de 16 de julio de 2012, el Gobierno señaló que garantizaba la seguridad de todos los diplomáticos, refugiados y turistas, como lo demostraba su larga trayectoria como refugio para las personas que buscaban amparo contra la persecución o la discriminación. El Gobierno informó de que cierto número de refugiados había perdido la vida como consecuencia de tiroteos, explosivos u otros métodos criminales y se refirió asimismo al descubrimiento de los cadáveres de 19 jóvenes palestinos cerca de Aleppo, los cuales habían sido presuntamente secuestrados por "grupos armados terroristas" y luego ejecutados.

53. El Gobierno señaló que existía una categoría de extranjeros "patrocinados por otros Estados Miembros" que habían ingresado de manera ilegal a la República Árabe Siria con el fin de ejecutar operaciones terroristas. Hizo referencia a su carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida al Secretario General, al Presidente del Consejo de Seguridad y al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo (S/2012/328), en la que incluyó una lista con los nombres de 10 ciudadanos extranjeros que ingresaron de manera ilegal a la República Árabe Siria y murieron en las operaciones terroristas armadas contra el ejército de Siria que estaban ejecutando.

54. Por otra parte, el Gobierno informó de que había detenido a 26 extranjeros que, según afirmó, participaban en actos terroristas. Señaló que la dirección de Al-Qaida había instado a sus miembros a ir a luchar a la República Árabe Siria. Según el Gobierno, una vez desvelada la participación de ciudadanos extranjeros, los "grupos armados terroristas" deliberadamente comenzaron a deshacerse de los cuerpos de las personas asesinadas, quemándolos o enterrándolos en zonas desiertas o arrojándolos a ríos, a fin de ocultar toda prueba de la participación de extranjeros. El Gobierno sostiene que algunos de los Estados Miembros que patrocinaron la resolución 19/22 del Consejo de Derechos Humanos estaban entrenando, apoyando y contratando a mercenarios para que participaran en los enfrentamientos en la República Árabe Siria, haciendo caso omiso de los esfuerzos internacionales por combatir el reclutamiento de mercenarios, en particular las decisiones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo.

G. Ciudades asediadas

55. En el párrafo 11 d) de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exigió que las autoridades sirias levantaran el bloqueo de todas las ciudades que eran objeto de asedio. El Gobierno no proporcionó al ACNUDH información al respecto.

56. Otros informes indican que el número de puestos de control bajo las órdenes tanto de las fuerzas del Gobierno como de los grupos armados aumentó en todo el país. Se informa de que se hicieron circular listas de personas buscadas y se detuvo a personas en

⁴ Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Humanitarian Bulletin, Oriente Medio y África septentrional, N° 2, mayo-junio de 2012

⁵ Según estimaciones del Gobierno, hay aproximadamente un millón de refugiados palestinos e igual número de refugiados iraquíes.

los puestos de control de las gobernaciones de Homs, Al Ladhqiyyah, Idlib, Aleppo, Dar'a y Damasco. También según esos informes, en los puestos de control del Gobierno se ha denegado a pacientes el acceso a los servicios de atención de la salud.

57. A la luz de los informes recibidos por el ACNUDH, se observa un patrón de las operaciones militares en supuestas plazas fuertes de la oposición al Gobierno que incluye la utilización de cordones de seguridad, armas pesadas y registros de casa en casa. Según esos informes, tras acordonar ciertas zonas seleccionadas el personal de los puestos de control interrumpió los servicios básicos de agua y electricidad, entre otros. Se informa que, una vez acordonadas esas zonas, fueron sometidas a intensos bombardeos por unidades de artillería y tanques. A continuación, las fuerzas terrestres entraron en dichas zonas a fin de completar las operaciones militares.

H. Plan de Acción de la Liga de los Estados Árabes

58. En el párrafo 12 de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exhortó a las autoridades sirias a que aplicaran en su totalidad el Plan de Acción de la Liga de los Estados Árabes de 2 de noviembre de 2011, así como sus decisiones, sin más demora.

59. En su nota verbal de 16 de julio de 2012, el Gobierno de la República Árabe Siria afirmó que había aplicado de buena fe el Plan de Acción de la Liga de los Estados Árabes y recordó que había permitido y facilitado el acceso a la misión de observación de la Liga de los Estados Árabes y retirado sus fuerzas de las ciudades.

60. El Gobierno también señaló que había cooperado con el Enviado Especial Conjunto, aceptado el plan de seis puntos y aplicado gran parte de éste y apoyado sinceramente y facilitado la labor de los observadores de la UNSMIS, además de otorgarles protección. A juicio del Gobierno, estos esfuerzos reflejaban su voluntad de cooperar con la comunidad internacional a fin de alcanzar una solución pacífica basada en el diálogo nacional. En este contexto, el Gobierno acusó a los "grupos armados terroristas" y a ciertos Estados Miembros que los financiaban y armaban, de impedir que los observadores de la UNSMIS pudieran cumplir su mandato, así como la aplicación del plan de seis puntos.

61. El Gobierno afirmó que seguía apoyando el diálogo político y que debía existir un compromiso internacional y la voluntad política para aplicar plenamente el plan de seis puntos. Señaló que si no cesaba la provisión de armas y financiación a los "grupos armados terroristas" sería difícil aplicar el plan con el solo compromiso del Gobierno. El Gobierno añadió que acogía favorablemente el resultado de la reunión del Grupo de Acción celebrada el 30 de junio de 2012, mientras que los "grupos armados terroristas" y los Estados Miembros que los apoyaban eran contrarios a ese resultado.

I. Detenidos

62. En el párrafo 13 b) de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exigió que el Gobierno de la República Árabe Siria, de conformidad con el Plan de Acción de la Liga de los Estados Árabes y sus decisiones de 22 de enero y 12 de febrero de 2012, pusiera en libertad a todas las personas detenidas de forma arbitraria como consecuencia de la crisis.

63. Con arreglo al plan de seis puntos, el Gobierno tiene la obligación de acelerar y ampliar la liberación de las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las categorías de personas particularmente vulnerables y personas que participaban en actividades políticas pacíficas, y de permitir el acceso a los centros de detención. Como señalé en mi informe sobre la aplicación de la resolución 2043 (2012) del Consejo de Seguridad (S/2012/523), no

se han logrado avances destacados en este ámbito en el contexto más amplio de la condición jurídica y las circunstancias de miles de detenidos en todo el país, que siguen sin aclararse. Entre los detenidos figuran no solo combatientes sino también defensores de los derechos humanos, activistas políticos, mujeres y niños.

64. Durante el período que se examina, el Gobierno envió varias notas verbales a la Oficina del ACNUDH en relación con los detenidos, en las que afirmó que al 10 de julio de 2012 había liberado a casi 4.200 detenidos. En su nota verbal de 16 de julio de 2012, el Gobierno informó de que más de 10.000 presos se habían beneficiado de cuatro decretos presidenciales de amnistía, como también era el caso de un gran número de ciudadanos que se habían entregado, habían depuesto las armas y se habían comprometido por escrito a no portar armas y a no poner en peligro de cualquier otra forma la seguridad y estabilidad de la República Árabe Siria.

65. El Gobierno informó, en varias notas verbales dirigidas al ACNUDH, que había liberado a 206 detenidos el 10 de junio de 2012 y a otros 500 el 13 de junio. Además, comunicó que había liberado a 275 detenidos el 10 de julio y a 92 el 17 de julio. El Gobierno no proporcionó a la Oficina del ACNUDH la lista con información detallada sobre las personas liberadas. La UNSMIS tuvo constancia de la liberación de 609 detenidos en todo el país en tres momentos distintos, el 31 de mayo, el 14 de junio y el 11 de julio de 2012, como se señala en mi informe sobre la aplicación de la resolución 2043 (2012) (S/2012/523).

66. En su nota verbal de fecha 16 de julio de 2012, el Gobierno negó que sus fuerzas de seguridad hubiesen encarcelado, torturado y asesinado a niños, señalando que si se hubiese detenido a niños erróneamente éstos habrían sido liberados de inmediato sin someterlos a un proceso judicial, siempre y cuando fuesen inimputables por no tener la edad de responsabilidad penal.

67. Se siguen recibiendo informes de raptos o secuestros de personas por parte de los grupos armados de oposición al Gobierno. Según esos informes, en algunos casos los grupos armados de la oposición exigían pagos o municiones a cambio de la liberación de los secuestrados.

J. Derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica

68. En los párrafos 13 d) y 13 e) de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exigió que el Gobierno de la República Árabe Siria de conformidad con el Plan de Acción y las decisiones de la Liga de los Estados Árabes, garantizara la libertad de participar en manifestaciones pacíficas y permitiera el acceso de todas las instituciones pertinentes de la Liga.

69. Cabe recordar que, con arreglo a la propuesta de seis puntos, el Gobierno de la República Árabe Siria se comprometió a respetar la libertad de asociación y el derecho a manifestarse pacíficamente. Como señalé en mi informe sobre la aplicación de la resolución 2043 (2012) del Consejo de Seguridad (S/2012/523), el entorno general de intimidación y violaciones de los derechos humanos en la República Árabe Siria no permite que los ciudadanos expresen sus opiniones o se manifiesten libremente. Pese a los riesgos de la violencia, las protestas siguieron produciéndose durante el período que se examina, si bien en menor escala y por períodos más breves que las manifestaciones registradas en las etapas iniciales del levantamiento. También se organizaron manifestaciones en pro del Gobierno en varias localidades.

70. Durante el período que se examina se siguió informando de casos en que los agentes gubernamentales y de seguridad habían recurrido a un uso excesivo de la fuerza, incluso mediante municiones activas y fuerza letal, para dispersar manifestaciones pacíficas en

varias partes del país. Según informes recibidos en mayo y junio de 2012, al menos 200 manifestantes recibieron tratamiento por heridas de bala en hospitales locales de Aleppo, 10 de los cuales fallecieron. Según fuentes fidedignas, otros seis civiles resultaron heridos y cuatro de ellos fallecieron como consecuencia de tiroteos indiscriminados por parte de las fuerzas del Gobierno durante una manifestación en Aleppo el 6 de julio de 2012. Además, varios manifestantes fueron detenidos y puestos en régimen de incomunicación sin las debidas garantías procesales por participar en protestas.

K. Comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en la República Árabe Siria

71. En los párrafos 14 a 17, 20 y 21 de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos se refirió al mandato y la labor de la comisión de investigación internacional independiente sobre la situación en la República Árabe Siria establecida por el Consejo en su resolución S-17/1. La comisión continuó cumpliendo su mandato, con pleno apoyo de secretaría proporcionado por el ACNUDH. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 14 de la resolución 19/22, la comisión presentó un informe actualizado oral al Consejo durante su 20º período de sesiones (A/HRC/20/CPR.1). El informe actualizado contenía las conclusiones preliminares de una investigación especial realizada por la comisión sobre los acontecimientos de Al-Houla, atendiendo a la solicitud contenida en la resolución S-19/1 del Consejo. La comisión presentará asimismo un informe actualizado al Consejo en su 21º período de sesiones (A/HRC/21/50).

72. En el párrafo 17 de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos exhortó a las autoridades sirias a que cooperaran plenamente con la comisión de investigación. El presidente de la comisión visitó Damasco entre el 23 y el 25 de junio de 2012 a fin de examinar la labor de la comisión junto con las autoridades sirias. Los pormenores de esa visita se presentaron en el informe actualizado oral de la comisión. Sin embargo, hasta la fecha no se ha permitido el acceso de la comisión al país para realizar su investigación sobre el terreno.

73. En su informe oral al Consejo de Derechos Humanos de conformidad con la resolución 19/22 (A/HRC/20/CRP.1), la comisión de investigación incluyó información al 15 de junio de 2012. En el informe actualizado, la comisión afirmó que tenía razones justificadas para creer que las fuerzas del Gobierno y las milicias progubernamentales habían asesinado, arrestado arbitrariamente, detenido, torturado y sometido a violencia sexual a personas y que las fuerzas del Gobierno podían ser responsables de crímenes de lesa humanidad. La comisión informó asimismo de que los grupos armados de oposición al Gobierno, que habían intensificado su utilización de artefactos explosivos, también habían asesinado, secuestrado y torturado a miembros de las fuerzas de seguridad y a civiles. La comisión no había podido identificar a los responsables de varios incidentes en que se habían utilizado explosivos.

74. En los párrafos 20 y 21 de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos decidió transmitir los informes actualizados de la comisión de investigación a todos los órganos pertinentes de las Naciones Unidas y al Secretario General para que adoptasen las medidas apropiadas y recomendó que los órganos principales de las Naciones Unidas examinasen con carácter urgente los informes de la comisión de investigación y tomaran las medidas adecuadas para ocuparse de las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que pudiesen haberse cometido. Durante el período que se examina, el 19 de julio de 2012, transmití al Consejo de Seguridad el informe actualizado oral de la comisión de investigación (A/HRC/20/CRP.1). Cabe recordar que previamente, el 13 de diciembre de 2011, transmití al Consejo de Seguridad el informe anterior de la comisión (A/HRC/S-17/2/Add.1).

L. Oficina del Alto Comisionado y titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos

75. En el párrafo 18 de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos reiteró su llamamiento a las autoridades sirias para que cooperasen con los procedimientos especiales del Consejo y con el ACNUDH, entre otras cosas mediante el establecimiento de una oficina sobre el terreno.

76. En respuesta a esa solicitud, el Gobierno de la República Árabe Siria reiteró, en su nota verbal de 16 de julio de 2012, que había colaborado de forma seria y transparente con los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y otros mecanismos de derechos humanos "evitando la politización" de conformidad con los compromisos y las obligaciones internacionales del Estado. El Gobierno señaló asimismo que proporcionaba periódicamente al ACNUDH información documentada, incluidas las conclusiones preliminares de la comisión especial encargada de investigar el incidente de Al-Houla. En su nota verbal, el Gobierno no abordó la cuestión de la presencia del ACNUDH sobre el terreno.

77. El 1 de junio de 2012, durante el 19º período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, todos los titulares de mandatos de procedimientos especiales presentaron una declaración conjunta en la que deploraron el alarmante deterioro de la situación en la República Árabe Siria, subrayando que toda la información disponible indicaba que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, y posiblemente otros crímenes, a la luz del derecho internacional. Los titulares de mandatos instaron a las autoridades a que proporcionaran acceso pleno y sin trabas a los procedimientos especiales, entre otros.

78. Las solicitudes de los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos para visitar la República Árabe Siria, incluidas las del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, seguían pendientes. El 13 de julio de 2012, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias envió una solicitud de visita al país.

M. Esfuerzos desplegados por el Secretario General

79. En el párrafo 19 de su resolución 19/22, el Consejo de Derechos Humanos invitó al Secretario General a que adoptase las medidas necesarias para apoyar la labor de la Liga de los Estados Árabes a fin de lograr una solución pacífica de la situación en la República Árabe Siria.

80. Cabe recordar que la Asamblea General, en su resolución 66/253, hizo suyos el Plan de Acción de la Liga de los Estados Árabes de 2 de noviembre de 2011 y las decisiones de la Liga de 22 de enero y 12 de febrero de 2012. En este contexto, continué respaldando los esfuerzos del Enviado Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes, cuyo mandato, basado en la resolución 66/253, reflejaba por tanto todas las decisiones pertinentes de la Liga de los Estados Árabes. En mis cartas de fecha 25 y 27 de mayo de 2012 dirigidas al Consejo de Seguridad (S/2012/363 y S/2012/368), así como en mi informe sobre la aplicación de la resolución 2043 (2012) del Consejo de Seguridad (S/2012/523), figura una descripción detallada de mis esfuerzos a este respecto.

81. Durante el período que se examina, he exhortado constantemente a todas las partes a que se retiren de un conflicto cada vez más profundo y cooperen con la UNSMIS. Les he instado a que renueven su compromiso de buena fe con el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al plan de seis puntos propuesto por el Enviado Especial Conjunto, sobre la base del enfoque esbozado por el Grupo de Acción el 30 de junio de 2012, con miras a preparar la vía para un proceso político inclusivo dirigido por los sirios a fin de satisfacer las legítimas aspiraciones y preocupaciones del pueblo sirio.
